



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2019-00549-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: FÉLIX ANTONIO ORTIZ SUAREZ
DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

En el presente asunto, el señor **FÉLIX ANTONIO ORTIZ SUAREZ** promueve el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra el **SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE**, con la finalidad de obtener el pago de los daños morales, materiales y la vida en relación y perjuicios causados con la expedición de la resolución No. 34350 del 26 de julio de 2017.

Mediante providencia de fecha 17 de febrero de 2020¹, se formularon por este Despacho observaciones a la demanda presentada, como consecuencia de las falencias encontradas relacionadas con los presupuestos procesales de admisibilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 162 del CPACA., las cuales fueron: *i) estimación razonada de la cuantía, ii) medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, iii) de la notificación de actos administrativos demandados, iv) fundamentos de derecho de las pretensiones, v) del derecho de postulación y vi) de la conciliación extrajudicial.*

En virtud de lo anterior, el Despacho concedió el término de diez (10) días de conformidad con lo estipulado en el artículo 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que se subsanara el defecto señalado, so pena de rechazo.

Esta providencia fue notificada a las partes por estado 18 de febrero de 2020, tal y como se verifica a folio 76 del plenario y, el estado ordinario fijado en las carteleras de la página web de la Rama Judicial dispuestas para tal fin.

El apoderado judicial de la parte actora, mediante memorial radicado el 2 de marzo de 2020², allegó dentro del término legal escrito de subsanación de la demanda, en cumplimiento a lo señalado en proveído de data 17 de febrero de la misma anualidad.

Que mediante providencia de data 7 de julio de la presente anualidad, este Despacho Judicial declaró la falta de competencia para conocer del presente

¹ Folios 143 a 149 del expediente digital

² Folios 150 a 166 expediente digital

asunto, y ordenó la remisión por reparto a los Juzgados Administrativos de Bogotá, pertenecientes a la sección tercera.³

Una vez realizado el reparto por parte de la Oficina de Apoyo Judicial, le correspondió el conocimiento del presente asunto al Juzgado Sesenta y Uno (61) Administrativo Oral de Bogotá, el cual mediante providencia de fecha primero (1º) de septiembre de los corrientes, declaró la falta de competencia para conocer de la presente controversia.

Que una vez analizados los argumentos esbozados por el Juzgado 61 Administrativo de Bogotá, este Despacho Judicial considera que se incurrió en un yerro al ordenar la remisión del presente expediente a los Juzgados Administrativos de Bogotá pertenecientes a la Sección Tercera – Reparto, cuando lo correcto era suscitar el conflicto de competencia con el Juzgado Sesenta y Tres (63) Administrativo Oral de Bogotá, al ser este, el primer despacho que conoció de la presente controversia antes de ser asignado el expediente a este despacho, y que declaró la falta de competencia, al considerar que, el objeto del asunto tiene que ver con el presunto perjuicio causado con la expedición de algunos actos administrativos que afectan asuntos laborales al actor.⁴

Por lo anterior, se hace imperativo para este Estrado Judicial, **DECLARARSE NO VINCULADO** con lo resuelto en la providencia de fecha 7 de julio de los corrientes, habida consideración que, este Despacho debió suscitar el conflicto de competencia con el Juzgado Sesenta y Tres (63) Administrativo Oral de Bogotá y no ordenar la remisión a los Juzgados Administrativos de Bogotá pertenecientes a la Sección Tercera – Reparto; reparto que a la postre derivó en la remisión al Juzgado Sesenta y Uno (61) Administrativo Oral de Bogotá. Lo anterior, tiene como fundamento los precedentes jurisprudenciales del H. Consejo de Estado que sobre casos como el estudiado señala:

“Desde otro punto de vista, el de la jurisprudencia, la irregularidad continuada no da derecho.

Varias han sido las manifestaciones de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado sobre que “el auto ilegal no vincula al juez”; se ha dicho que-la actuación irregular del juez, en un proceso, no puede atarlo en el mismo para que siga cometiendo errores, porque lo interlocutorio no puede prevalecer sobre lo definitivo; -el error inicial, en un proceso, no puede ser fuente de errores. La Sala es del criterio que los autos ejecutoriados que se enmarcan en la evidente o palmaria ilegalidad.

Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 la calificación de la República como un Estado de Derecho con Justicia Social tiene implicaciones, entre otros, en la Administración de Justicia. No es concebible que frente a un error judicial ostensible dentro de un proceso, no constitutivo de causal de nulidad procesal ni alegado por las partes, el juez del mismo proceso, a quo o su superior, no pueda enmendarlo de oficio.”

³ Folios 192 a 195 del expediente digital

⁴ Folios 132 a 134 del expediente digital

De la misma manera, la H. Corte Constitucional⁵ señala, que el Juez se encuentra imposibilitado para revocar autos interlocutorios así éstos se encuentren dentro del término de ejecutoria, concluyendo para el efecto en lo siguiente:

*“La imposibilidad de modificar lo decidido a través de autos interlocutorios se explica también por el carácter vinculante de las providencias judiciales, el cual se proyecta entre las partes pero también respecto del juez que las profiere. **Cabe reseñar que el carácter vinculante no sólo se predica de las sentencias y de las providencias que ponen fin a una controversia, sino también de las decisiones judiciales, en general, una vez cobran ejecutoria.** El alcance de este carácter, sin embargo, no es el de excluir la posibilidad de que las providencias puedan ser controvertidas y modificadas a través del ejercicio de los medios de impugnación que se han previsto en el ordenamiento jurídico, entre los cuales se encuentran los recursos y las nulidades que pueden ser declaradas de oficio o a petición de parte. **En síntesis, el juez sólo puede apartarse de lo decidido en un auto interlocutorio si es la ley la que establece un mecanismo para ello o si la conclusión del proceso que ha de consignarse en la sentencia no armoniza con la decisión previa.**”*

Acorde con ello, este despacho considera que no es posible avocar el conocimiento de la demanda radicada, de conformidad con las siguientes,

CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo anterior, se vislumbra que el apoderado judicial de la parte actora, no solicita la nulidad de actos administrativos, sino por el contrario, eleva la demanda bajo el medio de control de Reparación Directa, habida cuenta que, el presunto daño invocado en la misma, se origina por el **hecho de la administración**, esto es, el Superintendencia de Transporte de no realizar el pago de los daños causados por la expedición de la Resolución No. 34350 del 26 de julio de 2017, por medio de la cual declaró abandono de cargo, vacancia y retiro del servicio, por lo que, la vía procesal que pretende el Profesional del Derecho, tanto en la demanda inicial, como en el escrito de subsanación, es el medio de control de reparación directa y no el de nulidad y restablecimiento del derecho.

Así las cosas, atendiendo a la autoridad que profirió el acto acusado y a la cuantía de las pretensiones, el despacho estima que la competencia para conocer el asunto de la referencia corresponde a los Juzgados Administrativos en primera instancia⁶, sin embargo, teniendo en cuenta que la controversia planteada no es de carácter laboral, su conocimiento se escapa a la competencia asignada a los juzgados de la sección segunda.

Ahora bien, tiempo atrás, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo N°. PSAA06-3345 de 13 de marzo de 2006,

⁵ Sentencia T-1274/05- Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil – Expediente: T.1171367 – Accionante: Álvaro Niño Izquierdo – Accionado: Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá

⁶ Artículo 155 C.P.A.C.A.

por medio del cual se implementaron los Juzgados Administrativos, en su artículo segundo dispuso que los juzgados del circuito judicial de Bogotá **se distribuyen en secciones**, la primera (del 1 al 6), la segunda (del 7 al 30), la tercera (del 31 al 38) y la cuarta (del 39 al 44) **conforme a la estructura del Tribunal Administrativo de Cundinamarca**. A estos despachos ahora también se suman los Juzgados 45 a 65 creados con posterioridad, los cuales también se dividen en secciones.

Igualmente, el Acuerdo PSAA06- 3501 de 6 de julio de 2006, de la Sala Administrativa del H. Consejo Superior de la Judicatura, en su artículo 5, dispuso que el reparto de los asuntos a conocer por cada grupo de juzgados se realizaría según la correspondencia que entre ellos existe con las secciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En este sentido, el Decreto 2288 de 1989, en su artículo 18 dejó establecido la conformación de las secciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así:

“ARTICULO 18. ATRIBUCIONES DE LAS SECCIONES. *Las Secciones tendrán las siguientes funciones:*

SECCIÓN PRIMERA. *Le corresponde el conocimiento de los siguientes procesos y actuaciones:*

1. *De nulidad y restablecimiento del derecho que no correspondan a las demás Secciones.*
2. *Los electorales de competencia del Tribunal.*
3. *Los promovidos por el Gobernador de Cundinamarca, los Alcaldes del mismo Departamento o el del Distrito Especial de Bogotá, en los casos contemplados en los artículos 249 del Decreto-ley 1222 de 1986 y 101 del Decreto-ley 1333 de 1986.*
4. *Las observaciones formuladas a los Acuerdos Municipales o Distritales y a los actos de los Alcaldes, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad.*
5. *Las objeciones a los proyectos de Ordenanza o de Acuerdo, en los casos previstos en la ley.*
6. *Los conflictos de competencia administrativa asignados al Tribunal.*
7. *La revisión de contratos, de conformidad con la ley.*
8. *Los recursos de insistencia en los casos contemplados en la Ley 57 de 1985.*
9. *De los demás asuntos de competencia del Tribunal, cuyo conocimiento no esté atribuido a las otras Secciones.*

SECCIÓN SEGUNDA. *Le corresponde el conocimiento de los procesos de nulidad y de restablecimiento del derecho de carácter laboral, de competencia del Tribunal.*

SECCIÓN TERCERA. *Le corresponde el conocimiento de los siguientes procesos de competencia del Tribunal:*

1. *De reparación directa y cumplimiento.*
2. *Los relativos a contratos y actos separables de los mismos.*
3. *Los de naturaleza agraria.*

SECCIÓN CUARTA. *Le corresponde el conocimiento de los siguientes procesos:*

1. De nulidad y restablecimiento del derecho relativos a impuestos, tasas y contribuciones.
2. De Jurisdicción Coactiva, en los casos previstos en la ley.” (Subrayado del Despacho)

De conformidad con lo planteado, y en especial teniendo en cuenta que los Jueces Administrativos del Circuito de Bogotá son jueces especializados conforme a la estructura del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que el apoderado de la parte actora elevó la presente demanda tanto en su escrito inicial como en el escrito subsanatorio, como **medio de control de reparación directa**, luego entonces, el conocimiento del presente asunto corresponde en primera instancia a los Jueces Administrativos de Oralidad de la Sección Tercera del Circuito Judicial de Bogotá, que para este caso, es el **Juzgado Sesenta y Tres (63) Administrativo Oral de Bogotá**, despacho al que inicialmente le correspondió por reparto el estudio del presente asunto.

Vale recordar que el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, en lo que refiere a la procedencia del medio de control de reparación directa, establece un marco amplio de procedencia, señalado que “...el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública”. En tal sentido, los funcionarios judiciales debemos evaluar la causa petendi, por cuanto, el solo hecho de que los daños reclamados presuntamente provengan de la expedición de un acto administrativo, no genera inexorablemente, que la competencia sea de la Sección Segunda de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto, en el evento en que no se esté enjuiciando o acusando la ilegalidad del acto administrativo, sino que por el contrario, se está determinando la generación de daños antijurídicos sin que se haga un juicio de valor sobre su presunta invalidez, entonces en estas circunstancias la competencia radica en la Sección Tercera.

En tales circunstancias, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, en concordancia con el numeral 4º del artículo 123 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho considera necesario remitir el presente expediente al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que proceda a dirimir el conflicto negativo aquí suscitado, dado que se presenta entre Juzgados del mismo distrito, pues tanto el **Juzgado Juzgado Sesenta y Tres (63) Administrativo Oral de Bogotá**, como este Despacho, **Juzgado Veintiséis (26) Administrativo Oral de Bogotá**, consideramos que no tenemos competencia para conocer del asunto, al tratarse de una controversia que no es de carácter laboral, pues lo que se solicita, es declarar administrativa, civil y extracontractualmente responsable a la nación por los perjuicios ocasionados con la expedición de un acto administrativo el cual no está solicitando su nulidad.

En mérito de lo expuesto el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO. - DECLARARSE NO VINCULADO con la decisión tomada en la providencia de data 7 de julio de 2020, de conformidad con la manifestación realizada en este proveído.

SEGUNDO. - DECLARAR QUE ESTE JUZGADO CARECE DE COMPETENCIA para conocer la demanda promovida por el señor **FELIX ANTONIO ORTÍZ SUAREZ** en contra de la **SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE**.

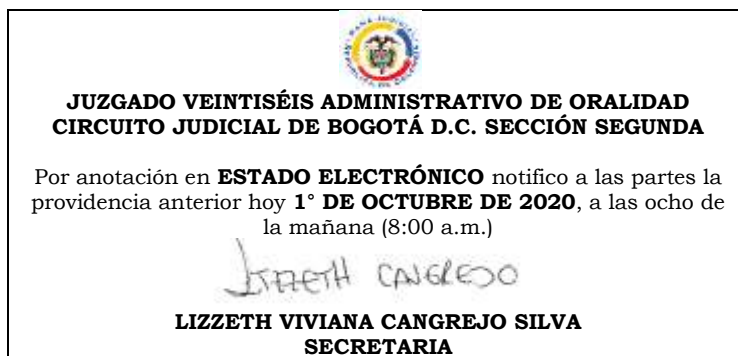
TERCERO. - PROMOVER CONFLICTO DE COMPETENCIA, entre este Despacho y el **Juzgado Sesenta y Tres (63) Administrativo Oral de Bogotá**, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

CUARTO. - REMITIR el presente expediente, una vez ejecutoriado este proveído, **AL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SALA PLENA**, con el objeto de que proceda a dirimir el conflicto suscitado.

QUINTO. - Por Secretaría déjense las constancias respectivas y dese cumplimiento a la mayor brevedad a lo aquí resuelto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

70



Firmado Por:

ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
973c45619438fcbff4dede854b5eb6a069c628536df6277ad59fadcd0d7a2f2b
Documento generado en 30/09/2020 07:23:34 a.m.